

EL OCCIDENTE.

DIARIO POLITICO.

EN MADRID.

EN PROVINCIAS.

ANO II. N.º 484.

Martes 5 de agosto de 1856.

EDICION DE LA MAÑANA.

MADRID DE 5 AGOSTO.

El triunfo del ministerio O'Donnell sobre los enemigos de las regias prerrogativas es ya completo y está asegurado. La bandera de la rebelión esparterista ha sido abatida en todos los puntos en donde habían osado sus adeptos levantarla contra la autoridad real; y aun algunos que se habían quedado sin bandera, se han quedado sin ella, puesto que el esparterismo que abatida se ve, sirviéndole ya para ser el objeto de la ex-milicia nacional de esta corte.

Zaragoza, última esperanza del progresismo rebelde, ha sucumbido. El general Dulce ha restablecido el imperio de las leyes en la capital aragonesa; y si bien es cierto que no ha mandado desarmar a la milicia nacional, también lo es que esta ha entregado las armas sin que nadie aparentemente se las pida, lo cual, para el efecto de quedarse sin ellas, viene a ser lo mismo.

Los noticieros falsos han quedado desconcertados por la rapidez con que sus anuncios de desastres han sido desmentidos. Aquellas grandes noticias de que las Cortes constituyentes iban a reunirse o se habían reunido ya en Zaragoza, de que el ex-general Falcon se hallaba a la cabeza de 40,000 soldados, de que el ex-general Gurrea había derrotado al general Echagüe, y otras por el estilo, si hace pocos días no encontraban a penas quien las creyera, hoy no pueden encontrar quien las propale, ni aun entre los mas tenaces espendedores de paparruchas. El tiempo y el trabajo invertidos en escribir y fijar pasquines fueron perdidos, y no produjeron resultado alguno al ánimo del público. En una palabra, a excepción de algunas partidillas, que vagan todavía por Cataluña, la tranquilidad, no solo material, si no también la moral, se han restablecido por completo en toda la península en términos tales como no eran conocidas en ella desde hace mas de dos años.

En este supuesto, se aproxima el instante de hacer cesar la incertidumbre con que todos los partidos esperan la solución de las cuestiones políticas, tenidas en suspenso mientras la cuestión de orden público estaba pendiente. Para nosotros y para cuantos examinamos con sangre fría el curso de los sucesos, tal incertidumbre apenas existe; pues no teniendo interés en desfigurar los hechos, y en exagerar las dificultades, no gastamos las fuerzas de nuestra imaginación, como otros las están gastando, en tratar de convencernos de que las cosas no son como real y efectivamente son.

Nosotros no necesitamos ya ver mas para saber, por ejemplo, que está resuelta la cuestión de la milicia nacional; porque después de lo que ha pasado, después de su rebelión casi universal contra el gobierno, después de su desarme, verificado en muchos puntos de un modo sangriento, es imposible, completamente imposible, pensar en reorganizarla. Aunque el ministerio actual creyera en la necesidad imprescindible de la fuerza ciudadana, aunque nada hubiese modificado los últimos acontecimientos sus ideas favorables a esta institución política, en el caso de que tales ideas tenga, sería de todo punto imposible pensar por ahora en devolver las armas a los mismos a quienes se han arrancado en rebeldía. Y para mas adelante, la fuerza de la opinión no permitirá a ningún gobierno conservador que proyecte volver a organizar tales elementos de continuo trastorno.

De la misma manera, tampoco creemos problemática la suerte de las Cortes constituyentes de 1854. No se bombardea a un Parlamento para presentarse después a someterle el proceso, que ya se ha fallado contra él por medio de las armas. Ni el decoro del gobierno, ni el de esas mismas Cortes toleraría que las considerase todavía abiertas, aun cuando otras razones legales no diesen al gobierno la facultad innegable de darlas por disueltas.

El respeto a la legalidad existente ha sido proclamado por el ministerio como una de las reglas de su conducta, en la circular sobre desamortización de 14 de julio. Y la real orden expedida por el ministerio de la Gobernación, en la que se manda a las autoridades militares, investidas de facultades extraordinarias por el estado de sitio, que cuando elijan ayuntamientos y diputaciones provinciales, cuiden de que ningún partido político tenga preponderancia en la composición del personal de estas corporaciones populares, es la condenación mas explícita y completa del espíritu de pandillaje y exclusivismo que dominó en tiempo de los progresistas.

Sin duda alguna, los puntos que acabamos de indicar, y algunos otros de que podríamos también hacer mención, bastarían para fijar bien la línea de conducta que el gobierno de S. M. se propone seguir, y le dispensarían de formular mas por menor su programa político, si los partidos no tuvieran decidido empeño de falsear el verdadero carácter de la situación, y no se colocaran en posiciones absurdas, que tendrán que abandonar cuando las intenciones del gobierno, además de ser claras, estén tan explícitamente consignadas, que a nadie sea lícito alegar su ambigüedad como pretexto para sus fines particulares.

Hay, sobre todo, una cuestión cuyo examen no puede demorarse sin producir graves riesgos, y sin dar incremento fundado a la incertidumbre: la cuestión constitucional. El ejemplo de la situación progresista, que tuvo al país durante dos años sin leyes fundamentales, no puede ser imitado. Los perjuicios de semejante estado de cosas se hallan demasiado patentes para que nadie los desconozca. La falta de una legislación constitucional conocida, y a la cual se ligan y subordinan todos los actos de la política, alimenta las pasiones de los partidos, y los estimula a hacer esfuerzos para que al fin sea resuelto el problema de la victoria. Todo lleva el sello de la interinidad, y nada consigue ser estable y sólido mientras falte la norma de las leyes políticas.

Conocemos que existen, no por culpa del gobierno actual, sino de su antecesor, dificultades graves que tendrán que ser vencidas al adoptar una resolución definitiva. La Constitución de 1843, que no ha sido derogada, y parte de cuyas disposiciones no han dejado de estar vigentes, debe servir de código fundamental mientras las nuevas Cortes, en unión con el gobierno, resuelvan en si ella se han de hacer alteraciones; pero preciso es confesar que el Senado antiguo, después de dos años de suspensión, ha quedado moralmente desautorizado para volver a ocupar su puesto. Reemplazarlo ahora, nombrando una vez todos los senadores, sería también un suceso grave, y no exento de inconvenientes; pero los inconvenientes no han de ser menores porque se demore el tratar de vencerlos, y por lo mismo, cualesquiera que sea la detención y madurez con que el gobierno quiera examinar este asunto, no hay motivo para desear que su resolución se dilate por mucho tiempo.

A las incalculables pérdidas pecuniarias que, como es notorio, trae consigo la publicación y sostenimiento de un diario político que, como el nuestro, quiera conservar sus condiciones de independencia, hay que agregar los quebrantos que ocasiona a las empresas periodísticas el mal organizado servicio de correos.

Acostumbrados durante los últimos tiempos a sufrir toda clase de abusos merced al desorden inaudito que ha reinado en el servicio de este ramo, y convencidos de que no era el Sr. Izardí la persona llamada a poner término a tal desbarajuste, fué por impericia o por debilidad, no hemos reducido a un silencio casi absoluto, que hemos roto únicamente cuando la gravedad de las faltas o las reiteradas escitaciones de nuestros amigos y correspondientes nos han obligado a ello, pero siempre con la seguridad de que sería perdido nuestro trabajo. Por estas mismas razones, y teniendo en cuenta lo difícil de las circunstancias y la necesidad, que sin duda reconocerá el gobierno, de organizar convenientemente el servicio de dicho ramo dotándole de un personal inteligente, celoso y que sepa cumplir con sus deberes, destituyendo sin consideración de ninguna especie a los jefes o subalternos que, pudiendo, no han remediado los infinitos abusos de que se queja el público y la prensa; por esta esperanza, decimos, nos abstendremos hoy de hablar sobre el particular, contentándonos con llamar la atención del gobierno, y muy especialmente la del activo señor ministro de la Gobernación, acerca de un asunto que afecta muy graves intereses y que hasta hoy ha sido mirado por los hombres del progreso con la mas soberana indiferencia.

Si el Sr. Izardí ha dado lugar, con su apatía o por su ignorancia, a que se perpetúen los abusos y se multipliquen las dificultades, no faltará entre nuestros funcionarios uno bastante celoso, recto e inteligente que sustituya la regularidad y el orden al desorden y a la perturbación que en los dos años últimos hemos lamentado en el servicio de correos.

En nuestro último número ofrecimos rectificar, caso de que se nos acreditase su inexactitud, el hecho relativo a la proposición del Sr. Moyano sobre la forma en que debía convocarse a los diputados, caso de que las circunstancias hicieran necesaria esta medida antes del término prefijado.

Hemos procurado indagar lo que ocurrió en la sesión a que nos referimos, y de nuestros informes resulta que efectivamente el Sr. Moyano formuló su pensamiento en forma de proposición, sino que espuso de viva voz las muy atendibles consideraciones que aconsejaban adoptar algún medio que evitase el grave inconveniente de que nos hicimos cargo al ocuparnos de este asunto. La idea emitida por el diputado conservador, mereció en apariencia el asentimiento de la Asamblea, y la mayoría de sus individuos se separó en la creencia de que se sobrentendía que la convocatoria se hiciera con arreglo a la manifestación del Sr. Moyano.

Por lo demás, no es preciso recurrir a la infracción reglamentaria, que sería ya bastante patente existiendo un acuerdo espreso de las Cortes, para demostrar la ilegalidad de la reunión del día 14 de julio, como lo hemos hecho en nuestras columnas.

Por fin, se ha acordado el desarme de la Milicia nacional de Santander, imperiosamente reclamado por la opinión pública.

Con fecha 1.º de agosto, se ha publicado un bando del gobernador militar y civil en comisión de aquella provincia, declarando disueltos y sujetos a reorganización los tres batallones de infantería de que se compone dicha fuerza.

Entre los nombramientos que se preparan están al parecer resueltos los siguientes: El general Serrano irá a la embajada de París.

El general Ros de Olano, vuelve a la dirección

de infantería, siendo además agraciado con el título de marqués de Salva-Centa.

El general Hoyos, actual director de infantería, pasará a la capitania general de Sevilla.

El general Echagüe, que si ya no ha llegado a Madrid lo verá en un momento a otro, será nombrado capitán general de Castilla la Nueva.

Por último, el Sr. Aleson, que desempeñaba la capitania general de Sevilla, entrará en la dirección de Artillería.

Parece que la cuestión que bien pudimos llamar de *estómago*, trae alarmados a muchos individuos que se desviven por manifestar las mayores o menores simpatías que demostraron durante los dos últimos años al actual presidente del Consejo y en todos tiempos a los individuos que componen el gabinete. El objeto que se proponen es el de que sean remunerados sus desinteresados servicios y su aparente adhesión al actual orden de cosas, con grandes cruces, empleos y otras zarandajas.

Aconsejamos al gobierno que no se deje marear por el humo de los incensarios, y que sea muy cauto en esto de premiar méritos y servicios de equívoca calificación.

Aun no se ha resuelto nada definitivamente acerca del regreso a España del Sr. Gonzalez Bravo, esperándose la contestación de dicho señor a cierta comunicación del gobierno.

Creemos que no hay razón alguna para demorar la venida del Sr. Gonzalez Bravo a quien asiste indisputable derecho para fijar su residencia en Madrid o en cualquier otro punto que le acomode, con la sola condición de que se le dé las leyes que rigen para todos los españoles que lejos de hostilizar al gobierno legítimo, han dado pruebas de adhesión y prestado importantes servicios al Trono constitucional y a las ideas conservadoras. En este caso se encuentra el señor Gonzalez Bravo, y no dudamos de que así lo apreciará el gobierno, autorizándole para regresar a su país y para seguir la línea de conducta que tenga por conveniente con arreglo a sus convicciones y principios políticos.

El mariscal de campo D. José Macarohan ha sido nombrado inspector general del cuerpo de Guardias civiles, sustituyéndole, en la subsecretaría del ministerio de la Guerra, el mariscal de campo D. Leopoldo de Gregorio.

Por real decreto de 30 de julio ha sido autorizada la constitución de la sociedad anónima *La Aseguradora*, que bajo el capital de cuarenta millones de rs., se propone alanzar el cumplimiento de contratos y obligaciones ajenas y los seguros contra toda clase de riesgos marítimos, así en tiempo de paz como de guerra.

Se ha mandado expedir las órdenes convenientes a todos los contadores de hipotecas y escribanos del reino, prohibiéndoles la intervención en el otorgamiento de escrituras de venta de predios rústicos y urbanos, censos y foros, en favor de las corporaciones cuyos bienes están mandados desamortizar.

La razón de esta medida está fundada en los datos estadísticos que tiene el gobierno de que algunas municipalidades, desconociendo el espíritu y letra de la ley vigente de desamortización, habían concebido el proyecto de adquirir nuevamente algunos bienes por sí o por medio de tercera persona. Fácil es comprender las complicaciones y monopolio a que podría dar lugar la tolerancia de semejante abuso.

Desde 1.º de actual ha cesado el abono que sobre los sueldos respectivos, pensiones, cesantías, jubilaciones y demás haberes disfrutaban en la actualidad las clases activas y pasivas en las Islas Canarias.

Se ha prevenido al director general de telégrafos que a la mayor brevedad proponga las medidas necesarias para que empiece a regirse desde 1.º de setiembre próximo el reglamento de 2 de abril último, sobre que ha de fundarse la organización ulterior del cuerpo y el servicio de telégrafos, atendiendo a que el estado en que se halla la construcción de las nuevas líneas eléctricas promete un término inmediato.

La Reina (Q. D. G.) ha tenido a bien conceder el *Regium exequatur*, con fecha 31 del mes próximo pasado, a D. B. Mitó Altet, nombrado cónsul de Bélgica en Valencia.

Se dispone una hornada de grandes cruces. Creemos prematuro designar las personas a quienes se destinan, pero oportunamente publicaremos sus nombres y circunstancias.

Entre los rebeldes de Zaragoza parece ha sido preso D. Felipe Abascal.

La *Gaceta* no publica todavía noticias detalladas de Zaragoza, si bien se sabe que reina en aquella ciudad la tranquilidad mas completa y que el nuevo capitán general había adoptado todas las precauciones que pueden garantizar la conservación del orden público.

Al disolverse la junta revolucionaria, publicó la siguiente manifestación, sobre la cual llamamos la atención de nuestros lectores:

«La junta superior de armamento y defensa de la provincia de Zaragoza ha terminado su existencia. Formose por el sentimiento noble de la libertad que creyó amenazada; mantuvo a este pueblo en el mas admirable orden; trabajó activamente en preparar la defensa de la plaza por si se veía hostilizada; comenzó mas tarde que la nación no había correspondido a su primera vocación; fué informada de que el gabinete O'Donnell iba a poner en peligro la libertad, si no a reservarla de sus mas abiertos enemigos; y desde este instante creyó que estaba en su deber el no prolongar por su parte una lucha estéril y sin objeto, y procuró avar la honra de Zaragoza, de acuerdo en este punto con el nuevo capitán general del distrito.

«La milicia nacional no será disuelta por el capitán general; pero todo lo que tenga delicadeza y pundonor sabe que no puede en servarse una arma que se ha alzado contra el gobierno a quien se reconoce: la milicia nacional de Zaragoza no faltará a este deber: para asegurarlo el que la conoce: hoy el patriotismo, el honor bien entendido consiste en deponer las armas. La junta da este consejo doloroso, y espera que la milicia nacional seguirá la suerte de la que ha sido hasta hoy su guía en este breve, pero interesante periodo de nuevas revoluciones.

Zaragoza 31 de julio de 1856.—El presidente, Falcon.—P. A. D. L. J., El secretario, Emilio de Miró.

De El Parlamento copiamos las siguientes líneas:

«La Nación, antiguo diario del progreso y ex-desafectado de la revolución de julio, reniega hoy de su hasta ahora constante idolatría hacia el duque de la Victoria, y ofrece humildemente al conde de Lucena el cuerpo acéfalo del partido progresista.

Ogamos a nuestro colega como desempeña esta mediente tarea:

«El general O'Donnell, que ha estudiado por principios el arte de la guerra, sabe que no da a un guerrero poder y utilidad el vencimiento. Vence el valor, tal vez, del soldado; viene la feliz combinación de un momento, que le viene al caso. La escocencia del general, que constituye real y verdaderamente la ciencia, para saber aprovechar la victoria. En manos de una capacidad vulgar la victoria es una luminaria; en las de Anibal decida de un ejército; de una campaña en las de Federico; en las de Napoleón de un imperio. Crece y se dilata como se alza el pensamiento, se reproduce al compás de la actividad empleada; desfilan y mueren cuando el vencedor encuentra en su camino una Cámpa que le adormece en sus delicias. Que no se deje mecer en las suyas el conde de Lucena, a quien nos proponemos decir la verdad con tanta lealtad como apaleemos para nosotros mismos, toda vez que, según hemos consignado, existe hoy una alianza positiva entre los intereses del país y los del general O'Donnell.

Los momentos son preciosos y es de imperiosa necesidad aprovecharlos.

El conde de Lucena nunca será mas poderoso que hoy, que todavía unos silvan las balas y sonar el cañón. Puede el presidente del Consejo de ministros vivir por sí solo, y con el alzado apoyo de la parte oficial del país? Esa parte, por adicta que le sea, ¿gobernaría a una potencia de Estado gobernada sin que siga su pensamiento un partido numeroso que le ilustra, que guía la opinión pública, que le allana los obstáculos y que combatía a su lado? Y ¿donde va a reclutar el conde de Lucena ese poderoso ejército? Cuando empezará a afilar sus soldados y a llenar los cuadros de jefes y oficiales?

El partido moderado no puede servir de base para esta especie de *conscriptio*, porque en sentir de nuestro colega no tiene mas que jefes, y por otra parte es muy consecuente con sus jefes, lo cual no sabemos cómo conciliar. Partiendo de este supuesto, confiamos:

Los hombres templados del partido progresista ayudarán hoy lealmente al general O'Donnell. Los *purios* hacen votos por su consolidación, y tal vez le apoyarán personalmente en cuanto deje a ser un misterio la política del nuevo gabinete. ¿Por qué retardar lo que así amparar esta felizísima solución? ¿por qué no llamar a los dispersos antes de que contraigan otros compromisos o siembren palabras y doctrinas ante las cuales se encuentren obligados a observar una consecuencia fatal a su partido y al país?

No necesitamos proseguir. Con lo anterior basta para justificar la impresión que nos ha causado la lectura del artículo, y con las frases subrayadas para que el país pueda apreciar la clase de gente con que *La Nación* pretende que el general O'Donnell forme ese partido joven, que está hoy en el corazón de la mayoría sensata del país.

No podían pedir mas los enemigos que el conde de Lucena se habrá conquistado con su reciente victoria contra la anarquía.

«El partido progresista, que acepta lealmente la unión liberal, pueden sacarse hombres limpios, consecuentes, de alta respetabilidad, y que llevan consigo la representación de gente que sabe moverse, que vive de un solo objeto, que no es poca en número, y a quien sobran los medios para la disciplina que nadie se ha curado de enseñarle. Es preciso reglamentarlos, hacerles practicar una subordinación severa, teniendo siempre al frente los dos grandes enemigos que jamás cesarán de luchar.

Mezclados este partido varonil y de acción con el elemento conservador que quiere seguir lealmente el conde de Lucena, habremos conseguido reunir lo mejor de ambas comuniones, dando aliento a la una parte y moderando los impulsos de la otra.

Bien seguros estamos de que no puede, de que no debe ser otra la política del general O'Donnell, y bien convencido estará el mismo de que no es posible conducir un partido bajo su nombre y su influencia, sino este joven, allegado en la forma que hemos anunciado y que está hoy en el corazón de la mayoría sensata del país, cansado de tan continuados trastornos.

Si por desgracia cálculos, o por indolente abandono se desperdicia el momento de aprovechar la victoria, el retraimiento de muchos, las intrigas de algunos y la desventurada fealdad con que España aborta situaciones difíciles o complicadas, irán liando una nueva maceda de enredos y rodeando al conde de Lucena, que a su vez se creará en la forzosa necesidad de servirse de lo que le quede, y de verse arrastrado por un poder violento que desde hoy puede dominar, pero del cual se verá en breve dominado.

El *Diario de los Debates* publica un artículo sobre los sucesos de España, notable por la verdad e imparcialidad con que está escrito. Como que es una reproducción de las ideas que siempre ha sostenido El Occidente, le transcribimos a continuación. Hele aquí:

«Lo que ahaba de pasar en España no es ni una revolución ni una contra-revolución. Es el triunfo de la autoridad real, que ejerce regularmente sus prerrogativas constitucionales.

«Habiéndose disuelto el ministerio que gobernaba en España hace dos años en unión con la Reina, a continuación de sus intestinas disensiones anteriores, la Reina, procediendo en virtud de sus atribuciones, encargó a uno de los ministros dimisionarios que compusiera una nueva administración. La elección de la Reina se fijó en el general O'Donnell, como pudo haberse fijado en el general Espartero. Si la Reina se hubiera dirigido a este general, es seguro que los partidos revolucionarios hubieran aplaudido la resolución de la Reina, porque se hubiesen libsonado, con razón o sin ella, de gobernar en nombre del general; pero habiéndose confiado la Reina al general O'Donnell, los partidos revolucionarios, frustrados en sus esperanzas, se resolvieron a presentar la batalla al gobierno; el gobierno quedó victorioso, el derecho constitucio-

nal triunfó de la insurrección; es claro que semejante victoria no es una revolución.

«Tampoco es una contra-revolución. El ministerio que preside el general O'Donnell, y en el que se considera al Sr. Ros Rosas como miembro mas importante, después del general, es un ministerio monárquico, y constitucional liberal y conservador, que recibe su fuerza y su derecho en las instituciones que rigen en España, y que no ignora que estas instituciones son el mas firme apoyo del trono de la Reina Isabel. Nuestros responsables de Madrid insisten mucho en que si el ministerio ha ejercido una especie de dictadura desde que se formó, con isto en que le ha sido preciso hacerlo por las terribles circunstancias en que se ha encontrado; añaden que este poder sin límites pasa a los ministros; que todos desean con igual impaciencia deshacerse de él y someter su conducta a la apreciación de la representación nacional regularmente constituida.

«Según nuestros correspondientes, para juzgar bien los últimos sucesos que se han realizado en España y la situación que de ello resulta para este país, es necesario remontarse hasta el mes de junio de 1854, por que existe, según dicen, una íntima relación entre el alzamiento militar de aquella época y el advenimiento del nuevo ministerio.

«Los que se alzaron en 1854, se nos escribe, se proponían hacer que el gobierno observase la Constitución de 1843, suspendida de hecho desde hacia un año. Lo pretendían de que era preciso reformar esta Constitución, se la había suspendido provisionalmente, y se hacía lo posible, por medio de una transición mas o menos hábil, para volver a colocar a España bajo el régimen abrogado desde la muerte del Rey Fernando VII. En 1854, poco antes de la protesta armada del mes de junio, el congreso se hallaba dividido en dos facciones: la una, el partido de la revolución, y la otra, el partido de la conservación. Se había castigado severamente a muchos generales, a quienes se acusaba de haber espresado su opinión en el senado con demasiada independencia y viveza. La legalidad de las medidas tomadas por el gobierno contra estos senadores era, cuando menos, dudosa, y los generales castigados no tenían a quien recurrir cerrados como estaban las Cámaras. En semejantes circunstancias se verificó el movimiento militar que estalló en el Campo de Guardias y se desarrolló rápidamente después de la jornada de Vicálvaro. Los intenciones de los jefes de este movimiento, lo no eran un misterio, querían el restablecimiento de la Constitución y que se volviera a las prácticas de la monarquía constitucional; protestaban de su lealtad a la Reina; pedían la reunión de las Cortes, cuya legislatura había sido violentamente interrumpida; decían que estaban dispuestos a justificar a ante las Cortes, y se sometían de zutemano a lo que las Cortes quisieran resolver. Los generales que dirigían el movimiento, no decían otra cosa en sus proclamas, en sus órdenes del día, en sus correspondencias, y nada ha dudado jamás de la sinceridad de este lenguaje. Si, este era el objeto del alzamiento que estalló en los últimos días de junio.

«Pero no tardaron en intervenir los partidos revolucionarios, y su intervención desnaturalizó el primitivo carácter del movimiento. Consiste eso en que los autores del movimiento no previeron lo que debieron prever. Desde entonces se encontró al gobierno frente a frente de los realistas constitucionales y de los que querían o derrocar inmediatamente la monarquía, o al menos debilitar el poder real, esperando el momento en que se pudiera abolir la monarquía. El misterio había comprendido su debilidad, se había retirado para salvar a la Reina, pero lo había hecho demasiado tarde. Después de su retirada, había nombrado, bajo la presidencia del duque de Rivas, un nuevo ministerio, cuyos miembros pertenecían todos al partido constitucional; el Sr. Ros Rosas, hoy ministro de la Gobernación, formaba parte de él. Este ministerio se hubiera entendido con facilidad con los autores de la protesta militar; pero no podía entenderse con los partidos revolucionarios ya descontentados; retiróse a su vez, y la persona de la Reina quedó a la discreción de los vencedores. Había dos clases entre ellos: los constitucionales, cuyo jefe era el general O'Donnell; los revolucionarios de toda especie, que convenían en tomar provisionalmente al general Espartero por su jefe e intérprete. El general Espartero había comprendido desde el primer día que no podía pasar sin el auxilio del general O'Donnell, y los dos generales se habían reunido para formar un ministerio en común, que la Reina se vio en el caso de aceptar. Esto era una verdadera revolución; porque respetando en apariencia la persona de la Reina, se había violentado su derecho; se había roto la Constitución de 1843, que, sin embargo, había sido regularmente disuelta, votada y promulgada; se había apelado a la soberanía del pueblo para dar a España una nueva Constitución, sin tener en cuenta las prerrogativas de la corona.

«Damos la verdad; desde agosto de 1854 ha estado gobernada España revolucionariamente, bajo la influencia dominante de una Asamblea constituyente que podía a cada instante destruirlo todo y volver a construirlo a su antojo. En estos dos años, el poder real, continuamente abdicado, no ha resistido sino gracias a la fuerza que le prestaban los sentimientos monárquicos de los españoles, sentimientos que revivían, y sostenía la lucha que la Reina ha sostenido, casi siempre con éxito y siempre con energía. Desde los dos años la Corona estaba dignísima así, sin iniciativa, y mas de una vez se vio obligada la Reina a aceptar las resoluciones de la Asamblea que le inspiraban la mayor repugnancia. Los ministros de la Reina sufrían esta condición; y por mientras que el general O'Donnell se indignaba y se alarmaba de ello, el general Espartero parecía resignarse por lo común con excesiva facilidad. El general Espartero, con las mejores intenciones del mundo, encontraba el gobierno de la Asamblea constituyente como el mejor, mientras que el general O'Donnell le encontraba detestable, y declaraba que era preciso apresurarse a salir de una situación que enervaba y desmoralizaba a la nación. Los desórdenes que se hacen poco a poco en la Castilla han hecho ver la distancia que separaba a los dos generales, y demostrado que la Reina es imposible entenderse jamás. La Reina se alzó por su diferente manera de ver; por que previa que una separación sería la señal de una lucha sangrienta.

«La retirada del general Espartero, que produjo la de todos sus amigos, puso las cosas en el estado en que se hallaban hace dos años; cuando el general O'Donnell, en nombre de los realistas constitucionales, persistía en pedir que se entrase sinceramente en la ejecución de la Constitución, y cuando el ministerio constitucional de los señores duque de Rivas y Ros Rosas acababa de formarse, por eso es por lo que se considera al actual gabinete como el triunfo regular de la opinión constitucional.

«En 1854 se habían asociado para gobernar a España dos elementos natural y necesariamente opuestos; esta asociación ha durado dos años; acaba de romperse y únicamente hay una cosa de que extrañar y es de que haya durado tanto tiempo. Uno de estos elementos representaba los principios de orden monárquico y de libertad constitucional; el otro llevaba consigo la idea del desorden y de la violencia. La incompatibilidad de los dos elementos no se había manifestado jamás tanto como cuando se disolvió su unión.

«El ministro de la Gobernación, D. Patricio de la Escosura, que había ido a Castilla para investigar las causas de los crímenes que en aquellas provincias se habían cometido, había hecho lo posible para que recayese la responsabilidad de ellos sobre los partidos conservador y moderado, unos para acreditar estos partidos que para justificar a los doctores, a quienes se acusaba en todas partes. El general O'Donnell, ministro de la Guerra, tenía las manos llenas de prue-

bas contrarias á las aserciones del ministro de la Gobernación, las desmintió con singular vivacidad á la vez una alusión, diciendo que el ministro de la Gobernación no había pensado jamás en tener una política violenta é imparcial, mientras que el ministro de la Guerra, había organizado una vigilancia activa en los puntos del territorio. El general O'Donnell echó también en cara al Sr. Escosura su costumbre de recusar á los buenos y de tener contemplaciones con los malos. Era pues imposible que el general O'Donnell y el Sr. Escosura continuasen formando parte de un mismo gabinete. Esto lo comprendió la Reina al momento, pero se escapó a la penetración del general Espartero, quien, después de haber intentado en vano el avenir á sus dos colegas, tomó el partido de poner su división en manos de la Reina.

La Reina debía elegir entre los dos generales, á ambos quería por diferentes motivos, y ambos tenían ardientes partidarios entre las personas que rodeaban á la Reina; en medio de los combates de las recomendaciones, no escuchando la Reina sino sus propios instintos, tomó su partido con tan buen sentido como resolución. Hay que reconocer al gobierno, colocado en condiciones regulares, tan distante de los que quisieran la vuelta del régimen absoluto, como de los que por inercia ó por debilidad se manifestaban siempre dispuestos á secundar los excesos de los partidos revolucionarios.

Nuestros corresponsales no dudan que el ministerio español, después de haberse manifestado enérgico en la lucha, se aprovechará de su victoria con una moderación que, en semejante caso, pa sea de prudencia y de habilidad. Pero el ministerio no podía emprender nada antes de que estuviese asegurado su triunfo, antes de que estuviese asegurada su autoridad en todas las provincias de España. Mientras que se mantenía en cualquier punto la insurrección, parecía ir á la victoria el ministerio, y no se le podía pedir nada más que lo que lo había hecho, no podía anunciar que se disputaba la autoridad del gobierno, y bien pronto, no solo los amigos de los ministros, sino también sus adversarios tendrían derecho á preguntarles que iban á hacer á fin de asegurar el respeto de la autoridad y para conciliar la acción enérgica del poder con las libertades públicas.

El señor conde de Canga-Arquielles ha impreso y publicado una carta, que acaba de dirigir al presidente del consejo de ministros, acerca de los medios que, en su concepto, son mas á propósito para resolver con acierto las cuestiones políticas. Aunque muy distantes de conformarnos con el espíritu de este documento, nuestro amor á la publicidad, y la importancia que no podemos menos de atribuirle, nos obligan á reproducirlo en nuestras columnas.

Dice así:

Excmo. Sr.: La gravedad de la situación actual del reino, y las consecuencias funestas que de la solución que se le da pueden seguirse á los intereses de todos los hombres honrados, son á mi juicio, motivo bastante para justificar en estas críticas circunstancias el propósito de hacer llegar á los oídos de V. E. la voz sincera y desinteresada de un español que tiene en mucho la suerte de su patria.

Nacido á principios de este siglo, no me es posible presentarme exento de antecedentes que me hagan pasar como afiliado á alguno de los partidos políticos que por desgracia dividen á nuestra desgraciada sociedad. Como permanecí impasible en la terrible lucha que de medio siglo á esta parte trae divididos y contrariados á los españoles?

Tiempos hubo en que con sana intención, con ánimo deliberado y fijo en el natural deseo de mejorar los destinos de la patria, pude con aceptación, y se aceptaron de buena fe sin duda alguna, ideas y sistemas, prácticas y doctrinas que, predicadas entonces como buenas, la es erencia ha acreditado, sin embargo, que no eran las que en sí contenían la virtud necesaria para labrar la felicidad pública.

En estas ligerísimas indicaciones puede V. E. encontrar explicada mi situación, y deducir también de ellas lo imperioso del deber de concurrir por mi parte de alguna manera á la obra del bien, ya que desgraciadamente, y sin que yo lo haya podido contribuir en algo á ensanchar la boca de esa sima en que está á punto de hundirse la fortuna, el porvenir, y hasta la nacionalidad española.

No me propongo en estos momentos trazar la historia de los desaciertos de la política de nuestro país, innepár las intenciones, ni señalar las causas inmediatas de nuestros males. Es tan gravísima y tan apurada la situación de nuestra patria, que faltaría en desvario el no intentar procurar el auxilio de todos, cuando el salvarla tanto nos importa.

V. E., fijando su consideración de hombre de Estado en los lamentables y horrorosos sucesos iniciados en la vieja Castilla, y propagados después con asombrosa rapidez por las mas pacíficas comarcas de España, vióse en la sensible necesidad de declarar solemnemente que la propiedad y la familia estaban siendo desde 1854 el blanco de los sediciosos y anarquistas.

Y tan fuerte fue en V. E. esta convicción, que no titubeó en asegurar que había llegado la hora de la ucha, al oír que un ministro, asaz imprudente y revolucionario, alibía el incendio y el saqueo al principio religioso.

V. E., satisfecho lo que el deber le imponía, supo dejar á un lado y vendiendo la autoridad de su Reina, que, mediando en el conflicto, condenó las intenciones de su torpe consejero.

Alcancía la cuestión, V. E. no vaciló en señalarle su carácter social, y la palma del triunfo no podía menos de alcanzárle quien se proponía defender la existencia de intereses tan sagrados.

Como leal soldado, V. E. peleó, y ha sacado á salvo las miras, los deseos y los propósitos de la augusta persona que en un momento solemne hizo lucir sobre la contrista España un rayo de esperanza salvadora, mostrando la institución veneranda del trono, á la que en estos momentos tiene encomendada la responsabilidad de sus infortunios.

Alto los truenos alzados en Madrid, Barcelona, Valencia, la Corona y otras ciudades, debido á la lealtad del ejército, no han bastado, ni lo iban á bastar, para devolver á los ánimos la tranquilidad perdida. Aparte de los conflictos que á mano armada siguen creando al gobierno en Zaragoza, Jaén, Málaga y otros puntos los elementos revolucionarios que hace algunos años vienen haciéndose entre nosotros, hay otra causa mas poderosa, que es preciso conocer bien para sofocarla, y lograr así que entre la paz en el corazón de los hombres honrados.

V. E. desnudó su espada, invirtiendo los intereses sociales, á fin de anular con su fuerza y principio revolucionario. Por eso la opinión pública usó de parte de V. E. la ayuda y auxilio en el combate; y y con ella podía V. E. seguir contando si, como es de desear, se consagra con entereza y decisión al sostenimiento de los principios tutelares que han venido en la rutina continúa.

Dotado V. E. de un carácter perseverante, y con el prestigio que le da la victoria alcanzada, puede, á mi modo de ver, aspirar á la salvación del país, si en vez de prestarse á apoyar las exigencias de partidos y banderas desacreditadas, acepta la posición de soldado leal de su Reina, dispuesto á hacer obedecer su augusta voluntad, encañonada desapaionada y sinceramente á la felicidad de la patria.

Si V. E. será vencido, y no tardará mucho. El principio monárquico y el principio religioso son los dos polos de nuestra regeneración social; á ellos debe unirse y exclusivamente consagrar sus servicios y su vida el general O'Donnell.

En las circunstancias presentes urge que se haga oír la voz de la Reina, llamando en su auxilio y cobijando bajo su manto los intereses de los españoles honrados. La augusta voz del monarca, inspirada por la justicia y el deseo del bien, hallará eco en el corazón de los españoles, hoy lamentablemente divididos y contrariados. El monarca de S. M. debe anunciar la medida salvadora de la concentración del ejército pel poder público, y el propósito firme de organizar desde luego el país, buscando el apoyo de la religión, de la propiedad y del saber.

Porfózo es reconocer que la lucha está trabada entre el principio monárquico y el revolucionario.

Entre estos dos extremos no hay amalgama ni combinación posible. La lógica es y ha de ser inflexible. Resolver las cuestiones, que hoy deben decidirse, ocasionando general disgusto, es lo que rechaza la razón. Entre los que quieren Mitica nacional, desamortización y régimen parlamentario, y los que no quieren ninguno de estos elementos de perturbación y desorden público, no cabe término medio; y el que se proponga erigirle en ley, de seguro puede y debe contar con la oposición y la guerra de todos.

V. E., repito, ha tomado la iniciativa en favor del trono. En nombre de la autoridad real V. E. ha peleado y ha triunfado. Hacer después de la victoria concesiones, solo le proporcionará debilitar su posición, no recabar ni un solo amigo en el campo de sus contrarios, y hacinar nuevos elementos para otro conflicto, en el que con las armas en la mano se volverá á contender la prepotencia de uno de los dos principios que pugnan en nuestra sociedad.

No conviene tomar por número á los partidos lo que forma la parte oficial. Si el gobierno en estas circunstancias apela á unas elecciones, en las que en algún punto votaban y las apoyaban con su influencia en favor del bien, no lo harán hoy. Los muchos, muchos buenos españoles que existen en las provincias mirando con horror las doctrinas y tendencias socialistas del progreso, no querrán en elecciones, y el gobierno habrá de hacerlas solo, teniendo por contendientes á los que han sido vencidos por V. E.

Y para estos resultados, ¿no es preferible obrar en el sentido que aconseja la verdad, la moralidad, la razón y la conveniencia pública?

Penitense V. E. de que nuestro país está hambriento de justicia práctica y causado de fórmulas estériles para el bien.

El intento de llevar adelante el propósito de combatir la anarquía y la licencia, contando únicamente con la España oficial, es empresa, además de absurda, temeraria. A las muchedumbres de negocistas, alimentadas con esas doctrinas que les predicaban y ofrecen el reparto de los bienes de los ricos, no se las vence sino con el elemento vivificador de la fe religiosa, y monárquica, que tiene aun en España afortunadamente numerosos adeptos.

El entusiasmo necesario para estas luchas no se despierta en hombres hartos de la derrochación y de la matanza.

Para que una causa sea nacional, necesita pueblo que la sostenga.

Á la multitud revolucionaria, opóngase la multitud religiosa y monárquica. Si el católico el peñón de Castilla, y vera si aun hay en España quien rinda culto á la enseñanza en tiempos mas felices nos guiará al poder y á la victoria.

Sin pretensiones de ningún género, y obediendo únicamente al sentimiento que me inspira la situación en que nos encontramos, dirijo á V. E. estas indicaciones sinceras, desapaionadas, y en un todo conformes con los medios que creo pueden poner fin á los profundos males que nos agobian, y que ya señalé en mi alocución dirigida á los electores de la provincia de Oviedo en 15 de setiembre de 1854.

En Lorenzo del Escorial 21 de julio de 1856.—Excmo. Sr.: el conde de Canga Arguilles.—Escuclen-tísimo señor presidente del Consejo de ministros, conde de Lucena.

He aquí la relación de las declaraciones acordadas por la junta de clases pasivas en todo el mes de junio próximo pasado á los individuos que han solicitado ser comprendidos en los beneficios de la ley de 25 de julio de 1855.

D. Vicente María Clemente, juez de primera instancia de Plasencia, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 7 meses y 8 días de servicios.

D. Atanasio Echauri, oficial tercero de la contaduría de amortización en Zaragoza, cesó en 1843. Sin derecho.

D. Manuel Álvarez, jefe de sección del ministerio de Hacienda, cesó en 1843. Sin derecho.

D. Francisco Coronado, depositario de Hacienda pública en Villanueva de la Sierra, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 9 meses y 21 días de servicios.

D. Marcelino de Luna, secretario del gobierno político de Toledo, cesó en 1843; se le abonaron 11 años y 25 días de servicios.

D. Canuto Aguado, jefe político de Alava é intendente de la misma, cesó en 1843; se le abonaron 11 años y 25 días de servicios.

D. Luciano Mari Muñoz, jefe político é intendente en propiedad de Vizcaya, cesó en 1843; se le abonaron 11 años, un mes y 18 días de servicios.

D. José Galvez Cañero, fiscal togado del tribunal supremo de Guerra y Marina, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 8 meses y 15 días de servicios.

D. Vicente Medina y Corral, secretario del gobierno político de Zamora, cesó en 1843. Sin derecho.

D. Atanasio Martínez de Olango, presidente de sala de la Audiencia de Pamplona, cesó en 1843. Sin derecho.

D. Juan Ramon de Burgos y Bueno, comisionado principal de amortización, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 6 meses y 25 días de servicios.

D. Ramon Santolá y Moras, juez de primera instancia de Tolosa, cesó en 1843. Sin derecho.

D. Manuel Bar-elo, administrador de rentas de la Corona, cesó en 1843; se le abonaron 10 años y seis meses de servicios.

D. Diego Sánchez, oficial segundo y segundo del gobierno político de Vizcaya, cesó en 1843; se le abonaron 11 años, un mes y 26 días de servicios.

D. Tomás Perez, oficial del ministerio de la Gobernación, cesó en 1843; se le abonaron 11 años y 15 días de servicios.

D. Eugenio Díez, magistrado de la Audiencia de la Corona, cesó en 1843. Sin derecho.

D. Valentín Llanos, cónsul de España en Gibraltar, cesó 1843; se le abonaron 10 años, 10 meses y 5 días de servicios.

Excmo. Sr. D. Francisco Santa Cruz, jefe político de Teruel, cesó en 1843; se le abonaron 11 años, un mes y 23 días de servicios.

Excmo. Sr. D. José Arias Uriá, magistrado de la Audiencia de Valencia, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 9 meses y 12 días de servicios.

D. Juan Julián Stort, contador de rentas de Aranda de Duero, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 6 meses y un día de servicios.

D. Joaquín Garrido, consultor de las direcciones generales de correos y caminos, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 8 meses y 20 días de servicios.

D. José Luengo del Cerro, administrador de correos de Mérida, cesó en 1843. Se le abonaron 10 años y 10 meses de servicios.

D. Ignacio Irigoyen, secretario del gobierno político de G. rous, cesó en 1843. Sin derecho.

D. Francisco de Madrid Javiá, fiscal de la subdelegación de rentas de esta corte, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 8 meses y 14 días de servicios.

D. Juan Gallardo Díaz, oficial segundo de la tesorería de rentas de Sevilla, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 2 meses y 20 días de servicios.

D. Pedro Sáenz de Quintana, promotor fiscal del juzgado de primera instancia de Burgos, cesó en 1843; se le abonaron 11 años, 2 meses y 4 días de servicios.

D. Gaspar Rivarola, marchador de la aduana de Sevilla, cesó en 1843; se le abonaron 10 años y 7 meses de servicios.

D. Cayetano Manrique, juez de primera instancia de Almuñécar, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 4 meses y 4 días de servicios.

D. Francisco de Borja Vidarte, secretario político de Granada, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 2 meses y 4 días de servicios.

D. Antonio de M. meses, jefe político de Albacete, se le abonaron 10 años, 8 meses y 8 días de servicios.

D. Clemente Russell y Zúñiga, fi de tudas de los heredamientos de tercios y riegos de Lorca, cesó en 1843; se le abonaron 11 años, un mes y 9 días de servicios.

D. Pedro Alonso, superintendente de la casa de moneda de esta corte, cesó en 1843. Sin derecho.

D. Blas Sánchez Grouados, oficial cuero de la contaduría de rentas de Alaba, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 2 meses y 21 días de servicios.

D. José María Cardero, oficial primero de la contaduría de amortización de la Corona, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 2 meses y 28 días de servicios.

D. Francisco de Paula Sáenz Silva, juez de Negreir, cesó en 1843. Sin derecho.

D. José Nieto, jefe político de Burgos, cesó en 1843; se le abonaron 11 años y 23 días de servicios.

D. Eleuterio Morán, magistrado de la Audiencia de Burgos, cesó en 1843; se le abonaron 10 años, 7 meses y 12 días de servicios.

D. Andrés Martín z, conductor de correos. Sin derecho.

Nuestro corresponsal de Granada nos escribe la siguiente carta:

«GRANADA 31 de julio.—Después de cuanto les he manifestado en mis anteriores, acerca de los acontecimientos de esta ciudad, réstame consignar que, gracias á las enérgicas disposiciones del Sr. Blanco, capitán general de este distrito, disfrutamos paz completa en esta ciudad y en las provincias limítrofes. A las pocas horas de su llegada ya no existía rebelión armada, especialmente en Málaga, cuyo gobernador se fugó en una lancha, según se dice de público, al saber que ha salido una columna de esta para Málaga, la que no llegó á obediencia y la milicia desarmada.

Romito á Vds. lista de los señores co-gejales nombrados por el capitán general interino Sr. Bellido, cuya conducta ha sido sujeta á un cese de guerra, según se dice en todos los círculos de esta ciudad, y seguramente lo merece, porque ha dado margen á la alarma en toda la provincia con sus pasivas medidas y su miedo aparente, si no efectivo. De buena hemos escapado: si la rebelión hubiera triunfado en algún punto, las provincias de Andalucía de seguro hubieran seguido el movimiento, y todo era debido á las contemplaciones de la autoridad militar. Como último acto de su jurisdicción extraordinaria nos ha regalado un Ayuntamiento la progresista como el saliente que el público rechaza, y cuyos individuos no debían admitir aunque fueren invitados á ello; pero está visto que los progresistas á trueque de ocupar el mando, transigían á su vez con los malos; los mas de los co-gejales han sido jefes y oficiales de la estinguida milicia, por manera que han salido de en sí y se han colocado en otro, tan hostiles serán en este puesto como en el que han dejado; el desengaño no llega nunca para ellos.

«Don Francisco Bellido, mariscal de campo de los ejércitos nacionales y capitán general interino de este distrito.

Hago saber: que en virtud de las facultades extraordinarias que me concede la ley del estado de guerra y demas excepciones hoy vigentes, he resuelto:

1.º Queda disuelto el Excmo. Ayuntamiento de esta capital.

2.º Para su reemplazo hasta tanto que pueda llevarse á efecto la elección con arreglo á la nueva ley; nombro otro provisional, compuesto de las personas que á continuación se expresan.

Alcaldes.

1.º D. Antonio Rubio, propietario.

2.º D. Angel Baro, comerciante.

3.º D. Nicolás de Mamel y Céspedes, fabricante.

4.º D. José Castella, propietario.

Síndicos.

1.º D. Manuel Clavijo Noguera, abogado.

2.º D. Escalístico Veilla, comerciante.

3.º D. Diego Muñoz, fabricante.

Regidores.

D. José Gomez Lopez, abogado.

D. Ramon Callejas, propietario.

D. Félix Lopez de Tejada, fabricante.

D. Félix Calliz, propietario.

D. Francisco Prieto Moreno, propietario y labrador.

D. Juan Ramon de la Chusa, id.

D. Juan Miguel Fernandez Cabezas, propietario y abogado.

D. Cristóbal del Castillo, id. y comerciante.

D. Luis Padilla, id. y abogado.

D. Manuel Navarro, id. y labrador.

D. Nicolás Medina, id. y farmacéutico.

D. Bonito Martínez, comerciante.

D. Isidro Martínez, id.

D. José Parajo, propietario.

D. Manuel Medina Torres, labrador.

D. José Higuera, id.

Tal es la nueva corporación que he elegido para que en los momentos actuales, se encargue de la difícil administración del municipio.

El Sr. D. Antonio Mantilla, gobernador civil de la provincia de Granada, ha publicado la siguiente notable alocución, á su llegada á aquella capital:

«HABITANTES DE LA PROVINCIA DE GRANADA.—Por su soberana resolución de 22 del mes que acaba, S. M. la Reina se ha dignado nombrarme encamisado gobernador civil de esta provincia, en necesidad de paz y de reposo, como agitada por tristes disturbios y lamentables alarmas.

Restablecida la pública tranquilidad, asegurado el orden social, imperante la ley en toda la provincia, cercano el instante de desentlar en ella las artes de la guerra para fomentar las artes de la paz, hora es ya de que vuestra autoridad superior civil os dirija su voz para esparcirlos la marcha que se propone seguir en el desempeño de su cargo, y trazados la norma á que deseará ajustarse la vuestra, á fin de mantener, estrechar y hacer fecundas nuestras relaciones oficiales.

Agente de un gobierno fuerte en su constitución y enérgico en sus determinaciones, del gobierno que ha acometido la empresa de hacer respetar las prerrogativas de la cora en estos últimos tiempos abiertamente conculcadas, del gobierno que ha tenido el valor de ahogar entre sus brazos al monstruo de la anarquía y de la disolución que amenazaba devorarnos, mi primer deber como mi mas estrecha obligación es restablecer y asegurar aquí el principio de autoridad, lastimosamente dilapidado, y conservar con firmeza el orden social, de la reforma, de todo progreso.

Delegado de un gobierno liberal y conciliador, toda mi atención y todo mi esmero se dirigirán después á elevar las llagas abiertas en los pueblos por la ardiente lucha de los disueltos bandos políticos, á proteger la seguridad individual y la libre manifestación de todas las opiniones legítimas, á uniformar las tendencias y adunar los esfuerzos de los hombres de bien y de los liberales de buena fe de todos los antiguos partidos, á borrar, en fin, si es posible, hasta las huellas de las disensiones civiles y de las reyertas de localidad.

Hijo de esta hermosa provincia, á la que por función de un hombre inteligente y reformador, alternaré con esos deberes y quitados el sagrado deber de desenvolver todos los gérmenes de prosperidad que brotan espontáneamente de nuestro privilegiado suelo, y el cuidado especial de fomentar todos los elementos de buena administración que se brindan generosamente á la sabiduría y fortaleza de los gobiernos dignos y de los administradores capaces.

Cuanto hombres de buena voluntad quieran ayudarme en esta tarea necesaria y urgente, cuantos liberales de orden gusten asociarse á esta empresa difícil pero meritoria, cuantos patriotas ilustrados se dignen prestarle la cooperación de sus luces y de su actividad, para llevar á feliz término una obra superior á mis fuerzas, cuando sufren, en fin, por la apatía ó los abusos del s agentes del gobierno, ó por la violencia y tiranía de las pasiones locales, así que se dignen á mi confianza, á cualquier hora y en cualquier forma, con sus proyectos, con sus consejos, con sus quejas, seguros de hallar en mi autoridad la mas franca acogida y la mas eficaz protección.

En justa reciprocidad, exijo á vez de vosotros, honrados y pacíficos habitantes de esta provincia, completa obediencia al gobierno que se ha propuesto alzar el orden en la reacción y la libertad sin la licencia, abso una continúa en que no corren el menor riesgo las legítimas conquistas de la civilización, y el debido respeto á las autoridades que van á desenvolverse por hacer vuestro bien y asegurar vuestro reposo.

Granada 30 de julio de 1856.—El gobernador: civil.—ANTONIO MANTILLA.

De Toledo hemos recibido la siguiente comunicación fecha 5 de agosto:

«En las muchas y variadas peripecias que ha pasado nuestra desgraciada patria, nunca el ejército se ha conducido con mas sensatez y cordura, nunca con mas honor y dignidad que en la presente. Diganlo sino todos los pueblos de España en algunos de los que la revolución armada ha sido vencida y aniquilada por un número insignificante de tropas, y otros en que la actitud imponente y digna de unos pocos soldados ha desconcertado los planes muy bien combinados de la revolución.

Los demagogos de Toledo, apoyados por la Milicia nacional, no solo de la capital sino de toda la provincia, habían nombrado ya su junta de salvación con sus autoridades civiles y militares y tomado todas las medidas necesarias para declararse en rebelión contra el gobierno de S. M.; el momento no podía ser mas oportuno, pues que este capital no tenía un solo soldado de guarnición, y por lo tanto estaban infinitamente convencidos de que no habría quien se les opusiera, pero el brillante colegio de infantería, cuyos jefes y oficiales son de lo mas selecto de nuestro valiente ejército, no titubeó un momento, á pesar de que solamente podía disponer de algunos ordenanzas, en hacer frente á la hidra revolucionaria, y fueron tan acertadas las disposiciones que emanaron de dicha corporación y tan imponentes que salvaron á este pacífico vecindario del horroroso cataclismo de que nos veíamos amenazados.

Digno es sin duda de recompensa el valor y heroísmo de los que combatieron en calles y plazas á la revolución armada, pero creo que no lo es menos el de los que con su decisión y bravura pusieron dique y contuvieron á numerosas masas que con lucidas por fervientes demagogos hubieran sumido muchas poblaciones en un caos de confusión y de desgracias.

Honor y loor al valiente ejército que en esta ocasión mas que en ninguna se ha hecho acreedor á una gran general en recompensa de la homogeneidad y decisión con que se agrupó al rededor del trono de nuestra adorada Reina.

No se crea, no, que es nuestro ánimo gravar el erario con un sin número de asensos. Crear una cruz que recuerde tan glorioso día para los oficiales que no lleven siete u ocho años de efectividad en sus empleos y para los que lleven este tiempo deséles el inmediato, que bien merecido lo tiene el que en tantos años de efectividad en su empleo sin haberse separado un solo momento de sus filas, ha atravesado estos calamitosos tiempos.

Llamamos sobre este particular la atención del digno maestro del ramo que con tanto tino dirige los destinos de la nación, pues que lo creemos un acto de justicia pudiéndole asegurar qe semejante medida merecería la aprobación de todas las personas sensatas.

Estamos de acuerdo con nuestro colega El Criterio en lo que dice respecto á los que engañados la buena fe de los incautos especulan con la sangre de los mozos á quienes ha cabido la suerte de soldados.

«Al hacerse efectiva la última quinta, se instruyeron en varias provincias algunas causas criminales contra varios agentes estafadores, que traficaban con la sangre de los infelices mozos á quienes habia cabido la suerte de soldado. Como estos casos se han repetido con harta frecuencia en nuestro país y hasta ahora no hemos visto un solo ejemplar en que se haya castigado á los que viven de este reprobado tráfico, y como por otra parte estamos avocados á que in y pronto tenga ingreso en el código las milicias provinciales, es ejemplo recordar al gobierno la conveniencia de activar cuanto antes estos procedimientos judiciales, á fin de que el reciente recuerdo del castigo sea suficiente á impedir la reproducción de estos crímenes.

De Perpiñan escriben el 29 de julio:

Los españoles refugiados en esta á disposición del señor prefecto son 39. Hélos aquí:

El general Ruiz, comandante general que era de Gerona.

Un mayor de plaza de la misma ciudad.

Un comandante del regimiento de Africa.

Un capitán y un teniente del mismo regimiento.

Un capitán del regimiento de Navarra.

Un teniente de estado mayor.

Veintidós entre sargentos, cabos y soldados.

El diputado á Cortes D. Enrique Climent y su secretario.

Un comandante y un capitán de la Milicia nacional de G. rona.

El secretario de la junta de dicha ciudad.

Un paisano y dos fra. ceros.

A estos refugiados se les darán pasaportes para el interior de Francia; pero parece que la mayor parte pedirán volver á España si se realiza la creencia en que se hallan de S. M. la Reina concederá un indulto á todos los sublevados de inferior categoría.

Leemos en La Discusión:

«La Nación, en busca de un partido que milite á las órdenes del conde de Lucena, dice que del progreso ta pueden sacarse hombres limpios; pero que es preciso reglamentar s, hacerles practicar una subordinación severa y tenerles siempre al frente del enemigo.

Suponjamos que en esta reglamentación entrará el engranche, á lo menos por siete años, la filiación, la ensenanza del manejo del arma y de evoluciones, y la sujeción á la ordenanza que se establezca. Desearnos ver pronto el figurín del uniforme que llevará este nuevo regimiento.

Dice un periódico que al presentarse el general O'Donnell á poner en conocimiento de la Reina la sumisión de Zaragoza, le retiró S. M. el deseo de verle elevado á la categoría de grande de España; pero que el presidente del consejo de ministros contestó á esta beneola manifestación, que se consideraba suficientemente remunerado con la satisfacción del servicio que acababa de prestar.

BOLSA.—Paris del 27 julio.

Fondos franceses.—Tres por 100, 71-40.

Idem cuatro y medio por 100 94.

plian el que en provincias de primera clase haya depositarios mequiniamente retribuidos, mientras existen otros de cuarta con sueldos tan crecidos que escuden en una mitad más de lo que importaban durante la dominación del partido moderado.

En la dirección de Infantería se está procediendo a la clasificación de los gefes y oficiales de reemplazo que se hallen en aptitud de desempeñar destinos civiles, a fin de emplearlos en esta carrera.

Las obligaciones del presente mes, cuya distribución de fondos por capítulos publica la *Gaceta* de ayer, ascienden por todos conceptos a 126.754.622 rs. 99 céntimos, en cuya suma están incluidos 1.500.000 reales para amortización de la deuda consolidada y amortizable de primera y segunda clase.

La existencia en la caja de depósitos al finalizar la cuarta semana de julio, era de 4.966.663 rs. 56 céntimos, en metálico, y 455.179.744 rs. 81 céntimos en papel, incluidos en esta última partida los billetes del Tesoro en garantía.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

La Reina (Q. D. G.) y su augusta real familia continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REALES DECRETOS.

Atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en el mariscal de campo D. José Macpherson, en la actualidad subsecretario del ministerio de la Guerra, yengo en nombrarle inspector general del cuerpo de Guardias civiles.

Dado en Palacio a 1.º de agosto de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donnell.

Teniendo en consideración los servicios y particulares circunstancias que concurren en el mariscal de campo D. Leopoldo de Gregorio, yengo en nombrarle subsecretario del ministerio de la Guerra.

Dado en Palacio a 1.º de agosto de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donnell.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

Visto el expediente de calificación instruido por el gobernador de la provincia de Barcelona, para la formación de una sociedad anónima que ostente el título de *La Aseguradora* y un capital de 40 millones de reales se propone, como objeto de sus operaciones, afianzar, mediante un premio convencional, el cumplimiento de contratos y obligaciones ajenas y los seguros contra toda clase de riesgos marítimos, así en tiempo de paz como de guerra.

Vista la real orden de 19 de julio último, por la que se aprobaron los Estatutos y reglamentos de esta Empresa, según se hallan insertos en la escritura adicional del 5 del citado mes, se mandó completar en el término de una sujeción de las acciones y que se hiciera efectivo en la caja de la sociedad el 6 por 100 del capital nominal.

Considerando que ha podido darse curso a este expediente por hallarse debidamente instruido, y que los objetos que se propone esta sociedad son convenientes para el fomento de la industria pública:

Considerando que se ha completado la suscripción de las acciones, y se ha hecho efectiva en la caja de la sociedad la cantidad que se le ha designado, según resulta de lo espuesto por el gobernador de la provincia mencionada;

Oído el tribunal supremo contencioso-administrativo, yengo en autorizar la constitución de la sociedad anónima denominada *La Aseguradora* para que pueda dar principio a sus operaciones en el término de un mes.

Dado en Palacio a 30 de julio de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El ministro de Fomento, José Manuel de Collado.

Instrucción pública.

Ilmo. Sr.: En los presupuestos generales del Estado que han de regir durante el año de 1856 y los seis primeros meses de 1857, se halla consignada la suma de millón y medio de reales, votada por las Cortes, para auxiliar a los pueblos en la construcción de locales y compra de menaje para las escuelas. Al hacer la distribución de aquella cantidad es preciso atender a las necesidades más urgentes y dar preferencia a los pueblos que tengan menos recursos, y a los que imponiéndose mayores sacrificios den muestra señalada de su celo y de su interés por la instrucción primaria, aunque procediendo, en cuanto sea posible, que se invierta en favor de cada provincia una suma proporcional a la que haya satisfecho para cubrir aquellas atenciones. Y a fin de proceder con uniformidad en asunto tan importante, de prevenir los abusos que pudieran introducirse, y de dar sólidas garantías de que la aplicación de estos fondos se verificará con la imparcialidad debida, la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que, para la resolución de los expedientes que con este objeto se formen, se observen las reglas siguientes:

1.ª Los ayuntamientos de los pueblos que carezcan de edificios para escuelas con los requisitos necesarios, y de habitación decente y capaz para el maestro, adoptarán las medidas oportunas para construirlos o comprarlos, o para habilitar los existentes, siempre que sean de propiedad de los municipios.

2.ª Los mismos deberán hacer para adquirir, comprar o poner el menaje en las escuelas en que fuere necesario.

3.ª Los que cuentan con suficientes recursos para llenar estas obligaciones que les imponen las leyes, dispondrán su cumplimiento a la mayor brevedad. A este fin los ayuntamientos podrán adoptar los arbitrios que les faculte la ley, y proponer a la autoridad superior de la provincia los que requieran su aprobación.

4.ª Cuando los pueblos carezcan totalmente de recursos y arbitrios, o cuando no fueren bastantes para cubrir los gastos indispensables, los ayuntamientos pedirán una subvención por conducto del gobernador de la provincia.

5.ª Los ayuntamientos que reclamen subvención, justificarán la necesidad, expresarán los recursos que cuentan, si los tuvieran, y acompañarán un presupuesto minucioso y aproximado de los gastos.

6.ª Cuando la subvención sea para la construcción o habitación de local de escuela, se acompañará a la solicitud un plano conforme al modelo oficial que se publicará por el gobierno, con las modificaciones que requieran las circunstancias especiales de la localidad.

7.ª Los gobernadores pasarán los expedientes que vinieren bien instruidos a la diputación provincial para que esponga su parecer acerca de la necesidad del subsidio, y a la comisión superior, para que con asistencia precisa del inspector informe sobre los locales o ensenares para que se pida la subvención.

8.ª Cumplidas estas formalidades, los gobernadores remitirán los expedientes al gobierno por conducto de la dirección general de instrucción pública, para que oyendo presenciamen al consejo superior del ramo cuando se trate de compra o construcción de edificios, y a la comisión auxiliar, si lo considerase necesario, dicte la resolución conveniente.

9.ª Serán admitidos con preferencia los pueblos que demuestren interés por la enseñanza, imponiéndose a ellos un sacrificio.

10.ª Al comunicar a los gobernadores la concesión de subsidios se expresará la época en que han de hacerse efectivos, a fin de que los ayuntamientos los puedan preparar con los trabajos con la debida oportunidad.

11.ª Toda concesión de subsidio se publicará en la *Gaceta de Madrid* y en los *Boletines oficiales* de las respectivas provincias.

De real orden lo digo a V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 24 de julio de 1856.—Collado.—Señor director general de instrucción pública.

Instrucción primaria.

De conformidad con los dictámenes de la comisión auxiliar de instrucción primaria y del consejo de instrucción pública, la Reina (Q. D. G.) ha tenido a bien aprobar la creación de una escuela normal elemental de maestros en esa provincia, cuya apertura deberá tener lugar en el curso próximo venidero; acordando S. M. al propio tiempo que en su real nombre den las gracias a V. S., así como a la diputación provincial y a la comisión superior del ramo, por el interés que tan eficazmente demuestran en favor de la enseñanza pública.

De real orden lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 22 de julio de 1856.—Collado.—Señor gobernador de la provincia de Segovia.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Ilmo. señor: Visto el expediente instruido con motivo del despacho en la aduana de Santander, de una partida de albayalde y otra de anacora ó amarillo de plomo, que D. Joaquín José del Castillo presentó al aduano, declarando ambos artículos en aquel sentido, y que del reconocimiento practicado por los vistas resultó ser el primero, pintura blanca preparada con aceite, y el segundo, cromado de plomo, y la Reina (Q. D. G.), conformándose con el parecer de esa junta consultiva, ha tenido a bien mandar que a la pintura preparada se le exijan los derechos que señala la partida 371 del arancel sin imposición de recargo alguno, y que se aplique la 402 al cromado de plomo, con mas el recargo que previene para semejantes casos la instrucción vigente de aduanas.

De real orden lo digo a V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 4 de julio de 1856.—Santa Cruz.—Señor vicepresidente de la junta consultiva de aranceles.

Excmo. Sr.: Los datos extraoficiales que se tenían de que algunas municipalidades, desobedeciendo el espíritu y letra de la ley vigente de desamortización, han concebido el proyecto de adquirir nuevamente algunos bienes por sí o por medio de tercera persona, han venido a corroborarlo el incidente promovido por D. Pascual Regoyos que habiendo rematado una heredad de tierra situada en término de la villa de Onda, procedente de sus propios, la cedió en el acto a su ayuntamiento: en su consecuencia, y comprendiendo S. M. (Q. D. G.) las complicaciones y monopolio a que podría dar lugar la tolerancia de semejante abuso, se ha dignado mandar que a evitarlo radicalmente se den las órdenes convenientes por el ministerio del digno cargo de V. E. a todos los contadores de hipotecas y escribanos del reino, prohibiéndoles la intervención en el otorgamiento de escrituras de venta de predios rústicos y urbanos, censos y foros, en favor de las corporaciones cuyos bienes están mandados desamortizar; previniéndoles en cuenta a las administraciones principales de venta de bienes nacionales de sus respectivas provincias de los documentos de esta clase en que hubiesen actuado desde 1.º de mayo de 1855, verificándolo asimismo de todos aquellos documentos en que intervengan y por los cuales adquirieran las citadas corporaciones bajo cualquier título bienes de las clases indicadas, máxime cuando por el artículo 26 de la ley vigente deben ser puestos en venta los que por donaciones y legados acepten, con arreglo a las leyes.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de julio de 1856.—Francisco Santa Cruz.—Excmo. señor ministro de Gracia y Justicia.

Ilmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.), de acuerdo con el parecer del Consejo de ministros, se ha servido resolver que desde 1.º de este mes cese el abono de la sexta parte u otro cualquiera que sobre los sueldos respectivos, pensiones, cesantías, jubilaciones y demás haberes disfruten en la actualidad las diferentes clases activas y pasivas en las islas Canarias, sin que sirva de excusa, para dejar de verificarlo, el que alguno de dichos aumentos se halle comprendido en los presupuestos vigentes.

De real orden lo digo a V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 5 de julio de 1856.—Santa Cruz.—Señor ministro de...

Ilmo. Sr.: He dado cuenta a la Reina (Q. D. G.) de la consulta que V. I. ha elevado a este ministerio con motivo de las dudas que se han ofrecido al tesoro de Sevilla respecto a la forma en que debe hacerse el abono de intereses a los compradores de bienes nacionales que anticipen plazos, y si estos anticipos deben admitirse por el orden correlativo de fechas, o si están facultados dichos compradores para satisfacer a voluntad cualquiera de los pagados de cada adjudicación. En su vista, y teniendo presente que conforme a lo que está prevenido en los artículos 19 y 20 de la real instrucción de 30 de junio de 1855, los compradores que anticipen plazos a bien entregar el líquido que resulte exigible, hecha la baja de lo que le corresponde por el premio del 5 por 100, formalizando el importe de este de la manera que prescriben dichos artículos, y la data con aplicación al respectivo concepto del presupuesto de venta de bienes nacionales, e ingresando por consiguiente en tesorería la cantidad líquida en metálico ó en billetes, a elección de los interesados; considerando que bien sea el pago en metálico, ó bien en billetes la forma de la operación, pues que está reducida a que, cuando se verifique en billetes, entreguen los compradores igual cantidad que la que darían en metálico, y atendiendo a que la ley de 1.º de mayo del año último no fija límite a los intereses para los anticipos, y a que en el número ni en el orden de los vencimientos, y a que aun invirtiendo el orden de los plazos y realizando el último con antelación a los primeros, no se irrogan mayores pérdidas al Tesoro que las autorizadas por el artículo 6.º de la expresada ley, toda vez que el abono del 5 por 100 no se hace al fin, sino en proporción de los vencimientos de los mismos pagados; la Reina, de conformidad con lo informado acerca del particular por las direcciones generales de contabilidad y venta de bienes nacionales, se ha servido resolver que, respecto al modo y forma de hacerse el abono de los intereses a los compradores de bienes nacionales que anticipen plazos, se observe estrictamente lo prevenido en los referidos artículos 19 y 20 de la instrucción de 30 de junio del año último, y que en cuanto al descuento de pagados, se verifique a voluntad de los compradores, sin alterarse al orden correlativo de vencimientos si se dispuso por real orden de 20 de enero de este año, a consecuencia de igual reclamación hecha por D. Carlos Adolfo Dahlbinder, comprador de bienes nacionales en la provincia de Alicante.

De orden de S. M. lo digo a V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 10 de julio de 1856.—Santa Cruz.—Señor director general del Tesoro público.

Ilmo. Sr.: He dado cuenta a la Reina (Q. D. G.) de la consulta de V. I. de 5 del corriente mes, en virtud de las diferentes observaciones para que solo en casos especiales se exija a los re-embolsadores de contribuciones la ampliación de fianzas prevista por el art. 63 de la instrucción de 16 de abril último, y S. M., conformándose en un todo con el parecer de V. I., se ha servido autorizar a esa dirección para extirpar de la ampliación a los reembolsadores que lo merezcan por el bien, desamparando por el contrario a formalizarla dentro de un breve término a todos los demás en quienes no concurren las circunstancias y se considere necesario en seguridad de los intereses de la Hacienda.

De real orden lo digo a V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 11 de julio de 1856.—Santa Cruz.—Señor director general de contribuciones.

Excmo. Sr.: No existiendo actualmente en las capitales de provincia breves para la expedición de efectos estancados, la Reina (Q. D. G.), en vista de las observaciones hechas por V. E., y conformándose con su parecer, se ha dignado mandar se suspenda el cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3.º del real decreto de 15 de febrero último respecto al abono del 10 por ciento equivalente al premio de expedición de sellos del franqueo de la correspondencia pública a los particulares, es que con primas de un pliego en las mencionadas breves, haciéndose extensiva a Madrid aquella medida por no ser justo se conceda a su vecindario un beneficio de que no puede participar el de los demás capitales de provincia.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Excmo. Sr.: He dado cuenta a la Reina (Q. D. G.) de lo espuesto por el cónsul de Prusia y vice-cónsul de Suecia, Noruega é Inglaterra en Torrevieja, y consignatorio de buques, para extraer sal al extranjero en el mismo punto, solicitando la gracia de que se les conceda el plazo de 60 días para el pago del importe de los cargamentos, mediante no poderlos realizar las mas veces en efectivo al recibir las guías, como se ha prevenido en el real orden de 28 de octubre de 1855, por no traer metálico los capitanes, sino letras que tienen que negociar.

Enterada de todo S. M., y conformándose con lo propuesto por esa dirección general en 7 de junio último, se ha dignado conceder como gracia especial a dichos consignatarios de buques, el plazo de 30 días para satisfacer a la Hacienda pública la sal que cargan para el extranjero en las salinas de Torrevieja, Ibi, Formentor y San Pedro del Pinar, pertenecientes al Estado, en las provincias de Alicante, Baleares y Murcia, admitiéndoles pagados garantidos al efecto, y entendiéndose solo únicamente cuando los capitales de buques no traigan dinero para pagar en el acto de recibir las guías el importe de los cargamentos.

De real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Por el ministerio de Gracia y Justicia se dijo a este de mi cargo, con fecha 19 de junio último, lo que sigue:

En vista del expediente remitido a este ministerio por el digno cargo de V. E., formado en motivo de haberse tenido que incautar a mano real de los papeles y archivos pertenecientes al clero de Arévalo, y a la resistencia que opusieron a su entrega el cabildo y párrocos de dicha villa, S. M. la Reina (Q. D. G.) conformándose con lo consultado con la Cámara de su real patronato, ha tenido a bien resolver que los individuos del clero que de n.º margen a la incautación a mano real deban ser obligados a satisfacer los gastos que su resistencia a las órdenes del gobierno ocasionen; pero entendiéndose, que los empleados que por razón de su oficio hayan de ejercer en esta clase de asuntos, no perciban derechos, y que se comunique así a los gobernadores civiles, a fin de evitar perjuicios.

Lo que de orden de S. M. comunico a V. S. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le concierne. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de julio de 1856.—Cantero.—Sr. Gobernador civil de la provincia de...

Excmo. Sr.: No existiendo actualmente en las capitales de provincia breves para la expedición de efectos estancados, la Reina (Q. D. G.), en vista de las observaciones hechas por V. E., y conformándose con su parecer, se ha dignado mandar se suspenda el cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3.º del real decreto de 15 de febrero último respecto al abono del 10 por ciento equivalente al premio de expedición de sellos del franqueo de la correspondencia pública a los particulares, es que con primas de un pliego en las mencionadas breves, haciéndose extensiva a Madrid aquella medida por no ser justo se conceda a su vecindario un beneficio de que no puede participar el de los demás capitales de provincia.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Excmo. Sr.: He dado cuenta a la Reina (Q. D. G.) de lo espuesto por el cónsul de Prusia y vice-cónsul de Suecia, Noruega é Inglaterra en Torrevieja, y consignatorio de buques, para extraer sal al extranjero en el mismo punto, solicitando la gracia de que se les conceda el plazo de 60 días para el pago del importe de los cargamentos, mediante no poderlos realizar las mas veces en efectivo al recibir las guías, como se ha prevenido en el real orden de 28 de octubre de 1855, por no traer metálico los capitanes, sino letras que tienen que negociar.

Enterada de todo S. M., y conformándose con lo propuesto por esa dirección general en 7 de junio último, se ha dignado conceder como gracia especial a dichos consignatarios de buques, el plazo de 30 días para satisfacer a la Hacienda pública la sal que cargan para el extranjero en las salinas de Torrevieja, Ibi, Formentor y San Pedro del Pinar, pertenecientes al Estado, en las provincias de Alicante, Baleares y Murcia, admitiéndoles pagados garantidos al efecto, y entendiéndose solo únicamente cuando los capitales de buques no traigan dinero para pagar en el acto de recibir las guías el importe de los cargamentos.

De real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Por el ministerio de Gracia y Justicia se dijo a este de mi cargo, con fecha 19 de junio último, lo que sigue:

En vista del expediente remitido a este ministerio por el digno cargo de V. E., formado en motivo de haberse tenido que incautar a mano real de los papeles y archivos pertenecientes al clero de Arévalo, y a la resistencia que opusieron a su entrega el cabildo y párrocos de dicha villa, S. M. la Reina (Q. D. G.) conformándose con lo consultado con la Cámara de su real patronato, ha tenido a bien resolver que los individuos del clero que de n.º margen a la incautación a mano real deban ser obligados a satisfacer los gastos que su resistencia a las órdenes del gobierno ocasionen; pero entendiéndose, que los empleados que por razón de su oficio hayan de ejercer en esta clase de asuntos, no perciban derechos, y que se comunique así a los gobernadores civiles, a fin de evitar perjuicios.

Lo que de orden de S. M. comunico a V. S. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le concierne. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de julio de 1856.—Cantero.—Sr. Gobernador civil de la provincia de...

Excmo. Sr.: No existiendo actualmente en las capitales de provincia breves para la expedición de efectos estancados, la Reina (Q. D. G.), en vista de las observaciones hechas por V. E., y conformándose con su parecer, se ha dignado mandar se suspenda el cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3.º del real decreto de 15 de febrero último respecto al abono del 10 por ciento equivalente al premio de expedición de sellos del franqueo de la correspondencia pública a los particulares, es que con primas de un pliego en las mencionadas breves, haciéndose extensiva a Madrid aquella medida por no ser justo se conceda a su vecindario un beneficio de que no puede participar el de los demás capitales de provincia.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Excmo. Sr.: He dado cuenta a la Reina (Q. D. G.) de lo espuesto por el cónsul de Prusia y vice-cónsul de Suecia, Noruega é Inglaterra en Torrevieja, y consignatorio de buques, para extraer sal al extranjero en el mismo punto, solicitando la gracia de que se les conceda el plazo de 60 días para el pago del importe de los cargamentos, mediante no poderlos realizar las mas veces en efectivo al recibir las guías, como se ha prevenido en el real orden de 28 de octubre de 1855, por no traer metálico los capitanes, sino letras que tienen que negociar.

Enterada de todo S. M., y conformándose con lo propuesto por esa dirección general en 7 de junio último, se ha dignado conceder como gracia especial a dichos consignatarios de buques, el plazo de 30 días para satisfacer a la Hacienda pública la sal que cargan para el extranjero en las salinas de Torrevieja, Ibi, Formentor y San Pedro del Pinar, pertenecientes al Estado, en las provincias de Alicante, Baleares y Murcia, admitiéndoles pagados garantidos al efecto, y entendiéndose solo únicamente cuando los capitales de buques no traigan dinero para pagar en el acto de recibir las guías el importe de los cargamentos.

De real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Por el ministerio de Gracia y Justicia se dijo a este de mi cargo, con fecha 19 de junio último, lo que sigue:

En vista del expediente remitido a este ministerio por el digno cargo de V. E., formado en motivo de haberse tenido que incautar a mano real de los papeles y archivos pertenecientes al clero de Arévalo, y a la resistencia que opusieron a su entrega el cabildo y párrocos de dicha villa, S. M. la Reina (Q. D. G.) conformándose con lo consultado con la Cámara de su real patronato, ha tenido a bien resolver que los individuos del clero que de n.º margen a la incautación a mano real deban ser obligados a satisfacer los gastos que su resistencia a las órdenes del gobierno ocasionen; pero entendiéndose, que los empleados que por razón de su oficio hayan de ejercer en esta clase de asuntos, no perciban derechos, y que se comunique así a los gobernadores civiles, a fin de evitar perjuicios.

Lo que de orden de S. M. comunico a V. S. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le concierne. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de julio de 1856.—Cantero.—Sr. Gobernador civil de la provincia de...

Excmo. Sr.: No existiendo actualmente en las capitales de provincia breves para la expedición de efectos estancados, la Reina (Q. D. G.), en vista de las observaciones hechas por V. E., y conformándose con su parecer, se ha dignado mandar se suspenda el cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3.º del real decreto de 15 de febrero último respecto al abono del 10 por ciento equivalente al premio de expedición de sellos del franqueo de la correspondencia pública a los particulares, es que con primas de un pliego en las mencionadas breves, haciéndose extensiva a Madrid aquella medida por no ser justo se conceda a su vecindario un beneficio de que no puede participar el de los demás capitales de provincia.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Excmo. Sr.: He dado cuenta a la Reina (Q. D. G.) de lo espuesto por el cónsul de Prusia y vice-cónsul de Suecia, Noruega é Inglaterra en Torrevieja, y consignatorio de buques, para extraer sal al extranjero en el mismo punto, solicitando la gracia de que se les conceda el plazo de 60 días para el pago del importe de los cargamentos, mediante no poderlos realizar las mas veces en efectivo al recibir las guías, como se ha prevenido en el real orden de 28 de octubre de 1855, por no traer metálico los capitanes, sino letras que tienen que negociar.

Enterada de todo S. M., y conformándose con lo propuesto por esa dirección general en 7 de junio último, se ha dignado conceder como gracia especial a dichos consignatarios de buques, el plazo de 30 días para satisfacer a la Hacienda pública la sal que cargan para el extranjero en las salinas de Torrevieja, Ibi, Formentor y San Pedro del Pinar, pertenecientes al Estado, en las provincias de Alicante, Baleares y Murcia, admitiéndoles pagados garantidos al efecto, y entendiéndose solo únicamente cuando los capitales de buques no traigan dinero para pagar en el acto de recibir las guías el importe de los cargamentos.

De real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Por el ministerio de Gracia y Justicia se dijo a este de mi cargo, con fecha 19 de junio último, lo que sigue:

En vista del expediente remitido a este ministerio por el digno cargo de V. E., formado en motivo de haberse tenido que incautar a mano real de los papeles y archivos pertenecientes al clero de Arévalo, y a la resistencia que opusieron a su entrega el cabildo y párrocos de dicha villa, S. M. la Reina (Q. D. G.) conformándose con lo consultado con la Cámara de su real patronato, ha tenido a bien resolver que los individuos del clero que de n.º margen a la incautación a mano real deban ser obligados a satisfacer los gastos que su resistencia a las órdenes del gobierno ocasionen; pero entendiéndose, que los empleados que por razón de su oficio hayan de ejercer en esta clase de asuntos, no perciban derechos, y que se comunique así a los gobernadores civiles, a fin de evitar perjuicios.

Lo que de orden de S. M. comunico a V. S. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le concierne. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de julio de 1856.—Cantero.—Sr. Gobernador civil de la provincia de...

Excmo. Sr.: No existiendo actualmente en las capitales de provincia breves para la expedición de efectos estancados, la Reina (Q. D. G.), en vista de las observaciones hechas por V. E., y conformándose con su parecer, se ha dignado mandar se suspenda el cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3.º del real decreto de 15 de febrero último respecto al abono del 10 por ciento equivalente al premio de expedición de sellos del franqueo de la correspondencia pública a los particulares, es que con primas de un pliego en las mencionadas breves, haciéndose extensiva a Madrid aquella medida por no ser justo se conceda a su vecindario un beneficio de que no puede participar el de los demás capitales de provincia.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Excmo. Sr.: He dado cuenta a la Reina (Q. D. G.) de lo espuesto por el cónsul de Prusia y vice-cónsul de Suecia, Noruega é Inglaterra en Torrevieja, y consignatorio de buques, para extraer sal al extranjero en el mismo punto, solicitando la gracia de que se les conceda el plazo de 60 días para el pago del importe de los cargamentos, mediante no poderlos realizar las mas veces en efectivo al recibir las guías, como se ha prevenido en el real orden de 28 de octubre de 1855, por no traer metálico los capitanes, sino letras que tienen que negociar.

Enterada de todo S. M., y conformándose con lo propuesto por esa dirección general en 7 de junio último, se ha dignado conceder como gracia especial a dichos consignatarios de buques, el plazo de 30 días para satisfacer a la Hacienda pública la sal que cargan para el extranjero en las salinas de Torrevieja, Ibi, Formentor y San Pedro del Pinar, pertenecientes al Estado, en las provincias de Alicante, Baleares y Murcia, admitiéndoles pagados garantidos al efecto, y entendiéndose solo únicamente cuando los capitales de buques no traigan dinero para pagar en el acto de recibir las guías el importe de los cargamentos.

De real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Por el ministerio de Gracia y Justicia se dijo a este de mi cargo, con fecha 19 de junio último, lo que sigue:

En vista del expediente remitido a este ministerio por el digno cargo de V. E., formado en motivo de haberse tenido que incautar a mano real de los papeles y archivos pertenecientes al clero de Arévalo, y a la resistencia que opusieron a su entrega el cabildo y párrocos de dicha villa, S. M. la Reina (Q. D. G.) conformándose con lo consultado con la Cámara de su real patronato, ha tenido a bien resolver que los individuos del clero que de n.º margen a la incautación a mano real deban ser obligados a satisfacer los gastos que su resistencia a las órdenes del gobierno ocasionen; pero entendiéndose, que los empleados que por razón de su oficio hayan de ejercer en esta clase de asuntos, no perciban derechos, y que se comunique así a los gobernadores civiles, a fin de evitar perjuicios.

Lo que de orden de S. M. comunico a V. S. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le concierne. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de julio de 1856.—Cantero.—Sr. Gobernador civil de la provincia de...

Excmo. Sr.: No existiendo actualmente en las capitales de provincia breves para la expedición de efectos estancados, la Reina (Q. D. G.), en vista de las observaciones hechas por V. E., y conformándose con su parecer, se ha dignado mandar se suspenda el cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3.º del real decreto de 15 de febrero último respecto al abono del 10 por ciento equivalente al premio de expedición de sellos del franqueo de la correspondencia pública a los particulares, es que con primas de un pliego en las mencionadas breves, haciéndose extensiva a Madrid aquella medida por no ser justo se conceda a su vecindario un beneficio de que no puede participar el de los demás capitales de provincia.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Excmo. Sr.: He dado cuenta a la Reina (Q. D. G.) de lo espuesto por el cónsul de Prusia y vice-cónsul de Suecia, Noruega é Inglaterra en Torrevieja, y consignatorio de buques, para extraer sal al extranjero en el mismo punto, solicitando la gracia de que se les conceda el plazo de 60 días para el pago del importe de los cargamentos, mediante no poderlos realizar las mas veces en efectivo al recibir las guías, como se ha prevenido en el real orden de 28 de octubre de 1855, por no traer metálico los capitanes, sino letras que tienen que negociar.

Enterada de todo S. M., y conformándose con lo propuesto por esa dirección general en 7 de junio último, se ha dignado conceder como gracia especial a dichos consignatarios de buques, el plazo de 30 días para satisfacer a la Hacienda pública la sal que cargan para el extranjero en las salinas de Torrevieja, Ibi, Formentor y San Pedro del Pinar, pertenecientes al Estado, en las provincias de Alicante, Baleares y Murcia, admitiéndoles pagados garantidos al efecto, y entendiéndose solo únicamente cuando los capitales de buques no traigan dinero para pagar en el acto de recibir las guías el importe de los cargamentos.

De real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de julio de 1856.—Cantero.—Señor director general de rentas estancadas.

Por el ministerio de Gracia y Justicia se dijo a este de mi cargo, con fecha 19 de junio último, lo que sigue:

En vista del expediente remitido a este ministerio por el digno cargo de V. E., formado en motivo de haberse tenido que incautar a mano real de los papeles y archivos pertenecientes al clero de Arévalo, y a la resistencia que opusieron a su entrega el cabildo y párrocos de dicha villa, S. M. la Reina (Q. D. G.) conformándose con lo consultado con la Cámara de su real patronato, ha tenido a bien resolver que los individuos del clero que de n.º margen a la incautación a mano real deban ser obligados a satisfacer los gastos que su resistencia a las órdenes del gobierno ocasionen; pero entendiéndose, que los empleados que por razón de su oficio hayan de ejercer en esta clase de asuntos, no perciban derechos, y que se comunique así a los gobernadores civiles, a fin de evitar perjuicios.

